

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

**Bogotá D.C, veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós (2022).**

REFERENCIA	ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN	Nº. 2022-00439
ACCIONANTE	JOHANDRY JOSÉ MARQUEZ BASTIDAS
ACCIONADO	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DECISIÓN	CONCEDE ACCIÓN DE TUTELA.

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela instaurada por el señor **JOHANDRY JOSÉ MARQUEZ BASTIDAS**, en contra del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**.

**BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO:**

El señor **JOHANDRY JOSÉ MARQUEZ BASTIDAS** interpuso acción de tutela por considerar vulnerado el derecho a la igualdad y de petición, con fundamento en los siguientes:

**HECHOS (SÍNTESIS):**

1. Informó que es ciudadano venezolano, actualmente residente en Colombia, dada la situación conocida de su país natal.
2. Señaló que para el 29 de noviembre de 2021 mediante radicado Nº 2021-EE-383215 inicio los trámites de convalidación del título de Especialista en Medicina Interna de la Universidad del Zulia – Venezuela.
3. Afirmó que su solicitud de convalidación cumple con los requisitos establecidos en la Resolución Nº 10687 de 9 de octubre de 2019 del Ministerio de Educación y que vencido el término de los cuatros meses, su solicitud no ha sido resuelta.
4. Indicó que el día 5 de abril de 2022 se llevó a cabo notificación electrónica de la Resolución Nº 004954, acto administrativo que contiene errores de transcripción en cuando hace referencia a otro solicitante.
5. Manifestó que el 6 de abril de 2022 en término del artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante radicado 2022-ER-188930 formuló recurso de reposición en subsidio de apelación en contra del acto administrativo referido en el punto anterior.
6. Arguyó que de conformidad al artículo 74 y ss de la Ley 1437 de 2011, los recursos que procedan contra los actos administrativos deberán ser resueltos en un tiempo máximo de dos (2) meses, por lo que el término para el Ministerio de Educación Nacional venció el 6 de junio de 2022, sin pronunciamiento alguno sobre el recurso formulado.
7. Comunicó que todos los meses ha realizado seguimiento al proceso a través de llamadas, chats, así como, ha acudido a la Unidad de Atención al Ciudadano -UAC de la accionada, para escalar la demora de su trámite, sin que medie una respuesta distinta a que su solicitud se encuentra en trámite y que debe seguir en espera.
8. Expresó que la falta de convalidación de su título profesional le ha impedido conseguir un empleo para poder sostener su familia, por lo que consideró que la conducta de la accionada no solo vulnera su derecho de petición, si no su derecho al trabajo y al mínimo vital.

### **PRETENSIONES:**

*Por lo tanto, acude el accionante al aparato judicial para que se le tutelen los derechos fundamentales vulnerados, ordenando al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL contestar de manera inmediata el recurso formulado concediendo la convalidación del título universitario.*

### **REGLAS DE COMPETENCIA:**

*Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública e incluso de particulares.*

### **ADMISIÓN Y LITIS:**

*La presente acción de tutela fue admitida mediante auto de fecha calendado quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022) donde se dispuso la vinculación de la SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y a la COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -CONACES y la notificación de la accionada y vinculadas para que ejercieran su derecho de defensa. (Archivo N° 011).*

*Fenecido el término concedido, la accionada dio contestación haciendo distinción de las funciones de CONACES como órgano evaluador del Ministerio de Educación Nacional y de su Dependencia Subdirección de Aseguramiento de Calidad de la Educación como la competente de coordinar y fungir como interlocutor entre la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) y cualquier otro organismo que acuda a su consulta. Aunado a ello, justificó su actuación sobre la existencia de ‘mora administrativa justificada’, como quiera que se tiene una alta demanda de solicitudes de convalidación de títulos académicos de ciudadanos venezolanos.*

*Así como, alegó que se encuentra dentro del término establecido en la Resolución N° 10687 de 2019 para resolver la solicitud de convalidación solicitada por el accionante. Sin embargo, luego indico que la solicitud de convalidación fue resuelta mediante Resolución N° 004954 del 5 de abril de 2022, sobre el cual se formuló por el solicitante recurso de reposición (solicitud de corrección), recurso que se encuentra en etapa de revisión, por lo que, una vez surtida la etapa de revisión y firmas, la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional procederá a notificar al accionante y enviar las resultas de tal gestión al Despacho para lo correspondiente. (Archivo N° 016)*

*No obstante, a la fecha de emisión del presente fallo, la accionada no presento prueba alguna sobre la notificación al accionante de la respuesta del recurso.*

*Por otro lado, se advierte que no fue allegado escrito de contestación a la presente acción constitucional, por parte de la DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, y la COMISION NACIONAL INTERSECTORIAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CONACES, por lo que se les recuerda a las anteriores entidades vinculadas que la omisión a la contestación del mecanismo Constitucional de la tutela, incurre en indicio grave de desacato y como consecuencia a tal omisión le genera la sanciones del Decreto 2591 del 1991.*

### **LEGITIMACIÓN ACTIVA:**

*La parte actora se encuentra legitimada como persona natural del derecho fundamental invocado, teniendo en cuenta que solo se necesita la condición de persona titular del derecho fundamental, cuyo amparo invoca.*

### **LEGITIMACIÓN PASIVA:**

*La presente acción se encuentra dirigida en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por ser la entidad que sería responsable por la acción u omisión vulneradora del derecho objeto de la presente tutela, se encuentra legitimado el extremo pasivo.*

### **CONSIDERACIONES:**

#### **PROBLEMA JURÍDICO:**

*Corresponde al Juez de tutela, determinar si al señor **JOHANDRY JOSÉ MARQUEZ BASTIDAS** se le están vulnerando los derechos fundamentales de petición, al trabajo, mínimo vital y al debido proceso, ante la falta de respuesta del recurso de reposición y en subsidio el de apelación formulado bajo el radicado 2022-ER-188930 adiado 6 de abril de 2022 contra la Resolución N° 004954 de 5 de abril de 2022 mediante el cual se convalido y reconoció un título académico.*

#### **IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOLUCRADO:**

#### **DERECHO PRESUNTAMENTE VULNERADO:**

*Señala el accionante como conculcado principalmente el derecho de petición. La Carta Política, lo plasma en su art. 23 como uno de los derechos constitucionales fundamentales que les asiste a las personas a fin de obtener una pronta resolución a las peticiones que de manera respetuosa se hayan elevado a cualquier entidad pública e incluso particular.*

*El derecho de petición, visto desde la órbita del estado social de derecho, es ante todo un garantizador de la puesta en marcha de la democracia participativa, estableciendo una efectiva relación persona - Estado, cobijando así muchos otros derechos consagrados como constitucionales como el derecho a la información y a la participación política de los coasociados.*

*El núcleo esencial del derecho de petición está constituido por la pronta resolución, pues de nada serviría que el ciudadano tuviera la posibilidad de dirigirse a la autoridad si no recibe de ésta una respuesta que resuelva la solicitud elevada.*

*La respuesta debe ser oportuna, resolverse de fondo de manera clara, precisa y en congruencia con lo solicitado y debe también ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.*

*A su vez, indica la accionante, como vulnerado el derecho al **debido proceso**, consagrado en el art. 29 de nuestra carta magna, en donde se indica que: "(...) el debido proceso, se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Es un derecho fundamental de toda persona nacional o extranjera, natural o jurídica. En esta medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular exigible por una persona y es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia".*

*El derecho al mínimo vital ha sido definido por la Corte Constitucional, según la Sentencia T-678/17, siendo Magistrado Ponente el Dr. Carlos Bernal Pulido (sic) "la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es*

*indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".*

*En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.), la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.). De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de mayor relevancia en el Estado Social de Derecho.*

### **El caso en concreto:**

*Así las cosas, procede esta Juez Constitucional al estudio en sede de tutela, indicando que el accionante invoca como derechos conculcados el de petición al trabajo, mínimo vital y debido proceso, supuestamente vulnerados por la entidad accionada.*

*De las pruebas documentales aportadas por el actor, se evidencia que su solicitud de convalidación presentada ante el Ministerio de Educación Nacional con el radicado N° 2021-EE-383215 de 29 de noviembre de 2021, fue resuelta mediante Resolución N° 004954 de 5 de abril de 2022.*

*Lo anterior, lo reiteró la accionada en su escrito de contestación, de modo, que es contradictorio el argumento de que se encuentran en término para la convalidación, máxime cuando la misma ya fue resuelta mediante el referido acto administrativo. Sin embargo, se observa que la Resolución N°004954 de 5 de abril de 2022 emitida por el Subdirector de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en su parte introductoria consideró: "Que JOHANDRY JOSE MARQUEZ BASTIDAS, ciudadano venezolano, identificado con cédula de extranjería No. 1029469, presentó para su convalidación el título de ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, otorgado el 27 de abril de 2017, por la institución de educación superior UNIVERSIDAD DEL ZULIA, VENEZUELA, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. 2021-EE-383215."*

*Y en su parte resolutive se avizora error en la identificación del convalidante y del título, en cuanto se indicó: "Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia, el título de ESPECIALISTA EN PUERICULTURA Y PEDIATRÍA, otorgado el 30 de noviembre de 2020, por la institución de educación superior UNIVERSIDAD DE ORIENTE, VENEZUELA, a TORIBIO JOSE RADA BARRIOS, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 1081788124, como equivalente al título de ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA".- (Archivo N°006)*

*De manera que, el actor notificado el 5 de abril de 2022 de la Resolución N° 004954 de 5 de abril de 2022, presento recurso de reposición en subsidio de apelación el **6 de abril de 2022**, donde solicitó corrección de la persona y el título convalidado.*

*De lo anterior, prima facie hay lugar indicar que la presente acción constitucional cumple el principio de subsidiariedad, en la medida que se demostró por parte del accionante que agoto los mecanismos de defensa judicial existentes para el trámite, que este caso, obedece justamente a la formulación de los medios de impugnación.*

*Ahora bien, ha de tener en cuenta que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) establece de manera diáfana en su Artículo 13, que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, aunado a que en virtud de dicha actuación se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una*

situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos, e interponer recursos.

Pese a lo anterior, se encuentra que la misma accionada ratifica que a la fecha de emisión del presente fallo constitucional, no se ha brindado respuesta sobre los recursos de ley interpuestos en contra de la Resolución N° 004954 de 5 de abril de 2022, alegando que el documento de respuesta se encuentra en proceso de revisión, firma y notificación, indicando que procederían a dar alcance a este Estrado Judicial allegando el certificado de envío de la notificación, alcance que no fue aportado al plenario. (Archivo N° 16)

Frente a la respuesta emitida por la entidad accionada donde alega de forma preliminar la existencia de una mora administrativa como eximente de responsabilidad, el Despacho retoma el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 donde precisa que cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados se debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto; sin embargo, nota este despacho que el Ministerio de Educación, conforme la petición radicada por el accionante el 6 de abril de 2022 bajo el radicado ER-188930 no ha informado al actor los motivos de la demora administrativa, y en caso de requerir un mayor tiempo, no señaló un plazo razonable para resolver la petición.

En consecuencia y dando cumplimiento a lo dicho por la H. Corte Constitucional frente al núcleo esencial del derecho de petición, y como quiera que a la presentación de este Instrumento Constitucional, no se ha dado respuesta de fondo, clara y precisa al derecho de petición solicitado por el accionante, se considera que no se han satisfecho los requisitos jurisprudenciales establecidos para tal fin.

En eventos como el del caso bajo estudio, la Corte ha reconocido que la omisión de respuesta constituye una violación de este derecho fundamental, y que además da lugar a su protección mediante la acción de tutela, lo cual puede acarrear sanciones disciplinarias para el funcionario que negligentemente ha omitido cumplir con su deber. Así lo sostuvo esta Corporación en la sentencia T-242/93.

En conclusión, observa este despacho Constitucional una conducta omisiva y violatoria de la entidad accionada, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR quien tiene el deber funcional de resolver el recurso de reposición y en subsidio el de apelación formulado contra la Resolución N°004954 de 2022, para con el señor **JOHANDRY JOSÉ MARQUEZ BASTIDAS**, por no dar respuesta a la solicitud, dado que como ya se expresó, la accionada apartándose de los lineamientos establecidos para la atención del derecho de petición, ha desatendido la solicitud elevada y no ha dado una respuesta de fondo que finiquite la controversia.

Por ende, la entidad MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por conducto del Subdirector de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, o quien haga sus veces, (en apego a su contestación que la respuesta al recurso se encuentra en trámite de revisión y firmas), deberá en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceder a resolver el recurso de reposición en subsidio el de apelación formulado por el actor contra la Resolución N° 004954 de 2022 mediante el cual se concedió la convalidación a persona y título distinto del solicitado y notificar en debida forma las resultas del trámite.

**POR MÉRITO DE TODAS LAS CONSIDERACIONES PLASMADAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO, ESTE JUZGADO ADMINISTRANDO**

**JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY,**

**RESUELVE:**

**PRIMERO: CONCEDER** el amparo constitucional solicitado por el accionante **JOHANDRY JOSÉ MARQUEZ BASTIDAS**, por las razones expuestas en esta providencia.

**SEGUNDO: ORDENAR** al **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, por conducto del **Subdirector de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior**, o quien haga sus veces, para que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a resolver el recurso de reposición en subsidio el de apelación formulado por el actor contra la Resolución N° 004954 de 2022 mediante el cual se concedió la convalidación a persona y título distinto del solicitado y notificar en debida las resultas del trámite.

**TERCERO: DESVINCULAR** a la **COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -CONACES**

**CUARTO: NOTIFICAR** de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

**QUINTO.** - De no ser impugnada esta decisión, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

**COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**SANDRA MEJÍA MEJÍA**  
**JUEZ**

JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE  
BOGOTÁ D.C.

El anterior auto se notificó por estado No. 68

Hoy 29 de junio de 2022

**CAROLINA SANTAMARIA LUNA**  
Secretaria

**Firmado Por:**

**Sandra Mejia Mejia  
Juez Circuito  
Juzgado De Circuito  
Familia 29 Oral  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **af8e679bf31fe7babb6c8537ee40bf9e41198e2da49db6ea759bf87889bc0b3c**

Documento generado en 28/06/2022 08:22:06 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**